

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	Bismarck Pineda López
DEMANDADAS	Horacio Toro Gómez
RADICADO UNICO NACIONAL	05001 31 05 010 2019 00679 01
TIPO DE PROCESO	Ejecutivo
DECISIÓN	Revoca
ACTA DE DECISIÓN	089 de 2021

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por la parte ejecutada, contra la decisión del 18 de febrero de 2020 que libra mandamiento de pago.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El 19 de noviembre de 2019, el Dr. Bismarck Pineda López, actuando en nombre propio, presentó demanda ejecutiva contra el señor Horacio Toro Gómez,

solicitando se libre mandamiento de pago contra este por la suma de \$16.160.671 por concepto de honorarios profesionales de abogado, según contrato de prestación de servicios del 15 de marzo de 2017, costas y gastos del proceso ejecutivo.

En auto del 27 de enero de 2020, se devolvió la demanda para que fueran aportados los siguientes anexos:

- i) Copia de la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 19 Civil Municipal bajo el radicado 2017-00155, y copia de la sentencia de segunda instancia, si la hubo.
- ii) Copia del auto que liquida y aprueba las costas procesales, y copia del auto que las declara ejecutoriadas.
- iii) Copia del auto que libra mandamiento de pago y de las demás actuaciones relevantes en el proceso que cursa o cursó en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias.

El requisito exigido obedeció a que el ejecutante “no aporta soporte alguno que permita determinar de dónde se desprende el valor que manifiesta adeudarle la parte ejecutada”, no cumpliéndose los requisitos de los artículos 100 del CPT y de la S.S.A y 422 del CGP.

En memorial de 31 de enero de 2020, la parte ejecutante allegó memorial de cumplimiento de requisitos, indicando que allega:

- i) Sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 19 Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en el radicado 2017-00155. Manifestó que no hubo sentencia de segunda instancia.

ii) Auto que liquida y aprueba las costas. Anotó que en el expediente no aparece el auto que las declara ejecutoriadas, pero que del numeral 4° de la sentencia aportada se evidencia que quedaron en firme

iii) Copia del auto que libra mandamiento de pago

vi) Respuesta de la oficina de Registros públicos del Circuito de Quibdó

vii) Auto que decreta embargo y secuestro del inmueble

En auto del 18 de febrero de 2020 se libró mandamiento de pago por \$16.160.617, que se desprenden de las siguientes sumas y conceptos:

i) Por la suma de \$13.360.671 correspondiente al 20% del total de la liquidación del crédito al 12 de abril de 2018, y que fuera pactado por las partes en el contrato de servicios profesionales

ii) Por la suma de \$4.800.000 por las costas procesales reconocidas por el Juzgado 19 Civil del Municipal de Oralidad de Medellín dentro del proceso con radicado 2017-00155.

iii) Menos la suma de \$2.000.000 recibidos al inicio de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN

Notificado el ejecutado presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, alegando la inexistencia de título ejecutivo. Cita los artículos 100 del CPT y de la S.S.A y 422 del CGP, indicando que en este caso no existe un documento sino 13, sin que el accionante haya indicado en forma precisa en cuál de estos puede predicarse el momento preciso del cumplimiento de la obligación reclamada y concomitante la ejecutoriedad del mismo, ni se expresa que este título sea complejo y cumpla la totalidad de requisitos.

Sostiene que en ninguno de los 13 documentos aportados como título ejecutivo aparece una manifestación de voluntad o texto del que pueda deprecarse que el ejecutado se obligó a pagarle al accionante una determinada suma de dinero en una fecha o momento determinada o determinable.

Informa que el ejecutado buscó un abogado para que le cobre un crédito y este lo dejó abandonado a mitad del proceso, sin haber practicado una medida cautelar de embargo y secuestro de un derecho en un inmueble indispensable para satisfacer su condena favorable, trámite que manifestó no haber realizado por miedo de ir a Urabá a practicarlo. Dice que el abogado renunció sin haber notificado a su cliente, por lo que sigue ostentando la postulación sin que haya vuelto a realizar ninguna actuación. Que sin haber recuperado un peso del crédito encomendado y sin haber terminado el trabajo, le cobra a su cliente lo pactado por la totalidad del mismo.

Respecto de la obligación dineraria objeto de cobro en este proceso, indicó que la costumbre es contratar en la modalidad de cuota litis, la cual habitualmente es del 20% de lo recaudado, y no el porcentaje de lo que se liquide el crédito como aquí se pretende, pues el demandante no recauda nada y adicionalmente queda debiendo el 20% de la liquidación del crédito, resultando útil el trámite solamente para el patrimonio del abogado. Agrega que el ejecutante es conocido en los estrados judiciales labores de Medellín e Itagüí demandando a título personal. Considera leonino el contrato, además de injusto e ilegal que se le cobre ese dinero sin terminar el trabajo.

En auto del 27 de julio de 2020, el a quo citó el numeral 4° del contrato de servicios profesionales, indicando que la obligación es clara, expresa y exigible al visualizar en los documentos aportados, que en el proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado 19 Civil Municipal de Oralidad de Medellín, se encuentra realizada y aprobada la modificación a la liquidación de crédito, y las costas emanadas del

proceso fueron liquidadas y aprobadas. No repuso la decisión y concedió el recurso de apelación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte ejecutada presentó alegatos de conclusión, reiterando lo argumentado en su recurso de alzada.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar, si en el presente caso obra título ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa y exigible, que permita libra mandamiento de pago en la forma solicitada por la parte ejecutante.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

Acorde con el inciso primero del artículo 100 del CPT y de la S.S. “Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”.

Ahora, conforme al artículo 422 del CGP¹, aplicable por analogía al procedimiento laboral en virtud del artículo 145 del CPT y de la S.A., el acreedor puede demandar por la vía ejecutiva las obligaciones expresas, claras y exigibles

¹ ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

que consten en documentos que procedan del deudor o de su causante, y sean plena prueba contra este. Dichos documentos se clasifican como títulos ejecutivos, los cuales debe probar la existencia de una prestación en beneficio de un sujeto. Esto es, el deudor está obligado frente a su acreedor a ejecutar una conducta de dar, hacer o de no hacer de manera clara, expresa y actualmente exigible.

Los títulos ejecutivos deben poseer condiciones formales y sustanciales, conforme a lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia T-747 del 2013:

Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación “**(i)** sean auténticos y **(ii)** emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme².”³

Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos.

De cara a las condiciones sustanciales que debe reunir el título ejecutivo, indicó la Corte Constitucional en la citada sentencia, que es clara la obligación cuando están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan; es expresa cuando la obligación es nítida y manifiesta en la redacción del documento; y es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición.

Así mismo, frente a los requisitos impuestos a los títulos ejecutivos consignados en el artículo 422 del CGP, en la sentencia STC3298-2019, Radicación n.º 25000-22-13-000-2019-00018-01 del 14 de marzo de 2019, indicó la Sala de Casación Civil de la CSJ lo siguiente:

² CONSEJO DE ESTADO, Sentencia No. 85001-23-31-000-2005-00291-01(31825), del 24 de Enero de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

³ Sentencia T-283 de 2013. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.

La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida”.

Según la jurisprudencia del Consejo de Estado⁴, el título ejecutivo bien puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, como por ejemplo un título valor (v.gr. letra de cambio, cheque, pagaré, etc.); o bien puede ser complejo, cuando quiera que esté integrado por un conjunto de documentos, como por ejemplo - entre otros - por un contrato, más las constancias de cumplimiento o recibo de las obras, servicios o bienes contratados, el reconocimiento del co-contratante del precio pendiente de pago, el acta de liquidación, etc., y acorde a la jurisprudencia constitucional, se entiende por título ejecutivo complejo, aquél cuya obligación está contenida en varios documentos que demuestran la existencia de una obligación⁵. Al respecto se indicó puntualmente en la sentencia T-747 de 2013 lo siguiente:

“el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos.

Las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es **clara** la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es **expresa** cuando de la redacción misma del documento,

⁴ Sentencia del 31 de enero del 2008 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, radicado 44401-23-31-000-2007-00067-01(34201)

⁵ Sentencia T-474 de 2018, T-747 de 2013, T-283 de 2013.

aparece nítida y manifiesta la obligación. Es **exigible** si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada.”

Corolario de lo anterior, todos los documentos que conforman el título ejecutivo complejo deben ser aportados por el acreedor al momento de instaurar la demanda ejecutiva contra su deudor, orrespondiéndole al juez valorar cada uno de ellos para precisar si se constituyen como prueba idónea que acredita la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor del ejecutante.

CASO CONCRETO

Alega el recurrente la inexistencia de título ejecutivo, indicando que en ninguno de los 13 documentos aportados aparece una manifestación de voluntad, o texto del que pueda deprecarse que el ejecutado se obligó a pagarle al accionante una determinada suma de dinero en una fecha o momento determinado o determinable.

Revisado el expediente virtual allegado en archivo PDF, en el que se encuentran los documentos aportados por el ejecutante que dan cuenta del trámite dentro del proceso con radicado 05001-40-03-019-2017-00155-00 se encuentra los siguiente:

FECHA	TRAMITE	Página
7/02/2017	Dr. Bismarck Pineda López, presentó demanda ante Juez Civil Municipal de Oralidad como apoderado de Horacio Toro Gómez, solicitando se libre mandamiento ejecutivo en su favor y en contra de Nohelia Ramírez Dávila, por \$30.000.000 representados en una letra de cambio, más intereses moratorios del 31 de mayo de 2014 hasta el pago, y costas.	13
9/02/2017	Dr. Bismarck Pineda López presenta memorial al Juzgado 19 Civil Municipal Oralidad de Medellín, solicitando medida cautelar de embargo y secuestro del derecho (33,33%) que en común y proindiviso tiene Nohelia Ramírez Dávila en el inmueble “un fondo rural denominado LOS PLACERES” ubicado en el Municipio de Unguía Choco.	17
9/02/2017	Auto libra mandamiento de pago en favor de Horacio Toro Gómez contra Nohelia Ramírez Dávila, por \$30.000.000, más intereses moratorios sobre el capital, a una y media veces el interés bancario corriente, desde el 1 de mayo de 2014 hasta el pago de la obligación.	43
20/02/2017	Auto del Juzgado 19 Civil Municipal Oralidad de Medellín, decretando el embargo solicitado el 9/02/2017	47

27/02/2017	Comunicación de MINJUSTICA al Juzgado 19 Civil Municipal Oralidad de Medellín, indicando: “Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito informarle que se inscribió la medida de embargo y por lo tanto se evidencia debidamente registrado en el oficio número 0445 de fecha febrero 20 de 2017, tramitad en esta oficina con el turno 2017-180-6-784 para la matricula inmobiliaria número 180-34519”	46
15/03/2017	Contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre el Dr. Bismarck Pineda López y Horacio Toro Gómez, para instaurar demanda ejecutiva de menor cuantía contra Nohelia Ramírez Dávila. En la cláusula 4° se pactan honorarios así: “Como honorarios para el trámite del proceso mencionado, se acordó que el CLIENTE pagaría DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) para iniciar el proceso (ya recibidos); y el VEINTE POR CIENTO (20%) del total de la liquidación del crédito, de los cuales se descontará los DOS MILLONES DE PESOS (2.000.000) ya pagados; más las costas del proceso”	
30/03/2017	Dr. Bismarck Pineda López presenta memorial al Juzgado 19 Civil Municipal Oralidad de Medellín, solicitando emplazamiento de la demandada.	21
17/06/2017	Dr. Bismarck Pineda López presenta memorial al Juzgado 19 Civil Municipal Oralidad de Medellín, solicitando oficiar al Juez Promiscuo Municipal de Unguia Choco, para la práctica de la diligencia de secuestro del inmueble ubicado en ese municipio.	23
20/06/2017	Dr. Bismarck Pineda López presenta memorial al Juzgado 19 Civil Municipal Oralidad de Medellín, dejando a disposición Despacho No. 56 dirigido al Juez Civil Municipal de Reparto de Quibdo Choco.	25
17/08/2017	Dr. Bismarck Pineda López presenta memorial al Juzgado 19 Civil Municipal Oralidad de Medellín, describiendo traslado de excepciones.	27
7/12/2017	“SENTENCIA. DECISIÓN 361.” del Juzgado 19 Civil Municipal Oralidad de Medellín, en la que se decidió: “PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución, dentro del proceso ejecutivo singular a favor de HORACIO TORO GÓMEZ en contra de NOHELIA RAMÍREZ DÁVILA, en la forma en que fue librado el mandamiento de pago proferido el 9 de febrero de 2017, obrante a folio 6 del expediente, advirtiéndole que los intereses de mora deberán causarse a partir del primero (1°) de junio de 2014 y no como se indicó en dicho mandamiento (...) SEGUNDO: Se ordenará el remate, previo avalúo, de los bienes que se llegaren a embargar y secuestrar, para que con su producto se pague la obligación a la parte ejecutante (...) TERCERO: ORDENAR a las partes efectuar la liquidación del crédito (...) CUARTO: CONDÉNASE en costas a la parte demandada, (...) se fija como agencias en derecho la suma de \$4.4800.000 (...)” Ordenó remitir a los Juzgados Municipales de Ejecución de Sentencias-Reparto	42
7/12/2017	Auto del Juzgado 19 Civil Municipal Oralidad de Medellín, que liquida costas en \$4.800.000. Aprobadas en auto del 15/12/2017.	45
21/03/2018	Dr. Bismarck Pineda López presenta memorial al Juzgado 19 Civil Municipal Oralidad, dejando a disposición liquidación del crédito del capital más intereses.	30
11/04/2018	Liquidación del Crédito realizada por el Juzgado Cuarto de Ejecución Civil Municipal de Medellín, por la suma de \$66.803.357,77 , modificando la presentada por el ejecutante.	54
11/04/2018	Auto aprueba liquidación del crédito por \$66.803.357,77 .	54
21/05/2018	Dr. Bismarck Pineda López presenta memorial al Juzgado 19 Civil Municipal, dejando a disposición Despacho No. 56 dirigido al Juzgado Civil Municipal de Quibdo Choco. Para que se comisione al Juzgado Promiscuo	31

	Municipal de Ungiá Chocho, toda vez que su jurisdicción está ubicada en el predio a secuestrar.	
22/07/2019	Dr. Bismarck Pineda López presenta memorial al Juzgado 19 Civil Municipal, manifestando su renuncia al poder conferido “en razón de que no ha pagado mis honorarios; no obstante, la demanda haber terminado con sentencia favorable a sus intereses”.	32-33
30/07/2019	Comunicación del Dr Bismarck Pineda a Horacio Toro Gómez, informando sobre su renuncia por la omisión en el pago de honorarios.	35
31/07/2019	Constancia de envió por la empresa de correos 472.	34
9/10/2019	Dr. Bismarck Pineda López presenta memorial al Juzgado 19 Civil Municipal, solicitando expedición de copia autentica de la liquidación de cotas y del auto que las aprueba.	38

Del análisis en conjunto de las anteriores pruebas, se advierte la existencia de una obligación clara, y expresa, la cual está contenida en un título ejecutivo complejo, integrado por un conjunto de documentos.

Sin que exista equívoco en cuanto a la prestación debida, pues el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre el Dr. Bismarck Pineda López y el señor Horacio Toro Gómez, es claro al estipular que los honorarios acordados entre las partes, por el trámite del proceso ejecutivo con radicado No. 05001-40-03-019-2017-00155-00, fueron “ DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) para iniciar el proceso (ya recibidos); y el VEINTE POR CIENTO **(20%) del total de la liquidación del crédito**, de los cuales se descontará los DOS MILLONES DE PESOS (2.000.000) ya pagados; más las costas del proceso”.

Surtidas las etapas correspondientes en dicho juicio, el crédito fue liquidado y aprobado por el Juzgado Cuarto de Ejecución Civil Municipal de Medellín en la suma de **\$66.803.357,77**, luego se reitera, existe una obligación clara, expresa, como se observa a continuación:

Total de la liquidación del crédito	\$66.803.357,77	
20% del total de la liquidación del crédito pactado en el contrato		\$13.360.671
Costas		\$4.800.000
Total		\$18.160.672
Menos suma recibida		\$ 2.000.000
Total para librar mandamiento		\$16.160.672

Se resalta que, conforme a la doctrina y la jurisprudencia “En términos generales, el proceso ejecutivo deviene de una pretensión de satisfacción de una obligación que aparece clara y determinada en el título que se presenta con la demanda⁶. Lo cual, contrario a lo indicado por el recurrente, se evidencia en este caso, pues los documentos allegados como título ejecutivo gozan de total claridad, expresividad que producen en el juez, de su simple lectura, el grado de certeza necesario para encontrar en ellos la existencia de una obligación indiscutible, sin que tenga que acudir a otros razonamientos para ello.

Empero, no puede la Sala dejar de lado el elemento EXIGIBILIDAD, el cual implica como se dejó anotado anteriormente, bien que se trata de una obligación de carácter pura o simple o bien que estando sometida a plazo o condición que debe ser expresamente determinada o determinable.

Toda vez que en el caso que ocupa la atención de la sala, se trata de una gestión de carácter jurídico concretamente actuaciones procesales a las que se obligó el contratista, su ejecución no permite situar sus obligaciones dentro del carácter de ser “puras o simples”, lo que impone el requisito de establecer un plazo o condición para la exigibilidad de las respectivas obligaciones, pues su ausencia genera dudas y no lo hace inequívoco, lo que precisamente no permite que el documento respectivo preste mérito ejecutivo.

En el contrato de prestación de servicios obrante como prueba documental, si bien se estableció el pago de una suma que sería determinable de dinero, correspondiente a un porcentaje sobre la liquidación del crédito, no se indica en que fecha o bajo que condición se deben cancelar los mencionados honorarios, pues queda la duda si es al momento de la terminación del contrato de prestación de servicios, al momento de la terminación del proceso para el cual fue contratado el profesional del derecho, ó bien para el momento de la liquidación del crédito, interpretación que no puede efectuar el Juez por vía de la expedida

⁶ Devis Echandía, H. Compendio de derecho procesal, Teoría general del proceso. Tomo I. Decimocuarta Edición, Editorial ABC, 1996 pág. 166 citado en la sentencia en SU-041 de 2018

acción ejecutiva, que se itera pende de lo expreso, claro y exigible del título respectivo, tres condiciones que se tornan necesarias.

Dicha situación fue atacada expresamente en recurso de alzada por el apelante cuando refirió a que ninguno de ninguno de los documentos que componen el título ejecutivo se desprende que el ejecutados se obligó a pagar al accionante una determinada suma de dinero en una fecha o momento determinado o determinable, argumento que comparte esta sala de decisión como se dejó sentado.

Conforme a las consideraciones anteriores, se **REVOCARÁ** la decisión recurrida.

Sin costas en esta instancia al no haberse causado.

En mérito de lo expuesto, la **Sala primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín**

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la decisión del 18 de febrero de 2020, la cual fue revisada en virtud del recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte ejecutada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena incorporar este auto al expediente y regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 113 de jun 30 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario

Código de verificación:

872496d6443086a328fd44890c5f57d4938615b090bb4009cf6722403ea59001

Documento generado en 29/06/2021 03:37:22 PM